

## **LEY B N° 2779**

**Artículo 1º** - El procedimiento para el ejercicio del amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos, será regulado por la presente.

**Artículo 2º** - El amparo previsto procede cuando se entable en relación con la protección y defensa de:

- a) El medio ambiente y el equilibrio ecológico, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire y las aguas, comprendiendo cualquier tipo de contaminación y/o polución que afecte, altere o ponga en riesgo toda forma de vida.
- b) Los derechos del consumidor, tanto de productos como de servicios de cualquier tipo, sean éstos públicos o privados, individuales o colectivos.
- c) El patrimonio cultural, comprendiendo los bienes arqueológicos, históricos, urbanísticos, arquitectónicos, artísticos y paisajísticos.
- d) Cualquier otro bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida.

**Artículo 3º** - Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses colectivos, podrán ejercerse:

- a) La acción de prevención.
- b) La acción de reparación en especie.
- c) La acción de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad.

**Artículo 4º** - Sin perjuicio de los supuestos comprendidos en el artículo 2º y de cualquier otro que corresponda en virtud de la presente, las acciones de prevención proceden, en particular, con el fin de:

- a) Paralizar los procesos de volcado, emanación o dispersión de elementos contaminantes del medio ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad.
- b) Impedir la circulación o comercialización de productos defectuosamente elaborados o disponer su exclusión del mercado de consumo cuando, por no reunir las exigencias en cuanto a calidad, seguridad y aptitud bromatológica, comprometiesen la salud, la persona o el patrimonio de los consumidores.
- c) Suprimir prácticas comerciales desleales que se valieren de publicidad engañosa, con ausencia o insuficiencia de advertencias a los consumidores, cuando a consecuencia del consumo sobrevengan efectos dañosos para la salud.
- d) Impedir el uso de productos o elementos peligrosos para la salud e integridad física de personas o animales, que perturben la tranquilidad pública o pongan en riesgo bienes públicos o privados, cuando dichos productos o elementos fueren manipulados en ambientes inapropiados o fuera de las normas de seguridad recomendadas o lo sean por personas inexpertas o no autorizadas.
- e) Impedir la comercialización de bienes y servicios, el otorgamiento de créditos o sistemas de ahorro con estímulo que se efectúen mediante

contratos con cláusulas que sean contrarias a derecho o resulten abusivas según la prudente estimación judicial, por afectar el principio de la buena fe, ocasionando perjuicios al consumidor, los cuales se presumen en caso de existir o sobrevenir marcado desequilibrio entre los recíprocos derechos y obligaciones.

- f) Contribuir a la detección de productos defectuosamente elaborados, facultándose a los organismos provinciales y municipales correspondientes para que, conjuntamente con el Juez de la causa, efectúen los controles y/u operativos procedimentales que defiendan los intereses de los consumidores, siendo su tarea revisada y controlada por el Juez, quien establecerá los puntos de pericia, calidades a verificar, procedimiento a seguir y facultará el secuestro de mercaderías y productos para su análisis.

**Artículo 5º** - La acción de reparación en especie tiene lugar siempre que sea posible recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a los intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento pecuniario por los daños subsistentes en los términos del artículo 6º. En forma no excluyente, en los siguientes supuestos consiste:

- a) En los casos de agresión al medio ambiente, al equilibrio ecológico o al patrimonio natural, histórico o cultural de una comunidad; en la imposición de la adopción de medidas eficaces para restituir la situación previa al o los hechos.
- b) En los casos estipulados en el inciso c) del artículo 4º, en la rectificación de la publicidad engañosa por los mismos medios y modalidades empleados en la difusión del mensaje irregular, o la corrección de sus términos para una adecuada información de los consumidores.

**Artículo 6º** - La acción de reparación pecuniaria por el daño colectivo procede siempre que se acredite la existencia cierta del daño. Esta acción no excluye la que puedan ejercer por separado el o los particulares que hayan sufrido un efectivo perjuicio en sus derechos individuales.

**Artículo 7º** - Es competente para entender en las acciones previstas en el artículo 3º, el Juez Letrado inmediato sin distinción de fuero o instancia y aunque forme parte de un tribunal colegiado, quien recibe el recurso interpuesto por cualquier forma y medio de comunicación y a cualquier hora.

Es competente el Superior Tribunal de Justicia, en forma originaria y exclusiva, cuando se den las situaciones de conflictos previstas en el inciso 2), apartado "d" del artículo 207 de la Constitución Provincial.

**Artículo 8º** - Están legitimados para ejercer e impulsar las acciones previstas en la presente, la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público, los Municipios y Comunas, las entidades legalmente constituidas para la defensa de los intereses difusos o colectivos y cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés colectivo.

**Artículo 9º** - El Juez resuelve, en cada caso, sobre la admisibilidad de la legitimidad invocada, en el término de veinticuatro (24) horas. Resuelta ésta, debe expedirse sobre el recurso interpuesto en el plazo de veinticuatro (24) horas, luego de merituar la magnitud de los daños o amenazas a los intereses colectivos comprometidos.

Si el Juez deniega la legitimación del accionante, pero a su criterio resulte verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza al interés colectivo

invocada en la demanda, corre vista al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción.

**Artículo 10.-** Si de las actuaciones surgiera la presunta existencia de un hecho delictivo, el Juez interviniente, de no corresponder ese fuero, debe dar traslado de la causa al Juez correspondiente, siguiéndose la tramitación conforme las disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia.

**Artículo 11.-** En la resolución que otorgue la legitimación, el Juez debe delimitar la composición del grupo de personas, comunidad o categoría representadas, indicando con precisión las pautas necesarias para individualizar los sujetos a quienes se extenderán los efectos de la sentencia.

**Artículo 12.-** Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente, las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que en forma directa o a través de terceros sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, daño, amenaza o menoscabo de los intereses difusos o derechos colectivos. Quedan comprendidos, además, las reparticiones de los Estados Nacional, provincial, municipal y comunas, cuando al otorgamiento de autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente, obraren con manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los intereses difusos y derechos colectivos.

**Artículo 13.-** Los sujetos responsables sólo pueden repeler las acciones previstas en la presente, cuando acrediten que el daño o la amenaza al interés colectivo es consecuencia del hecho de un tercero por el que no deben responder, de la culpa grave de la víctima o de un caso fortuito o de fuerza mayor que sean extraños a las cosas o actividades por los que se les atribuye el menoscabo. La responsabilidad de los sujetos indicados en el artículo 12 no queda exonerada por la circunstancia de mediar autorización administrativa para el ejercicio de la actividad o el empleo de las cosas que generen la privación, perturbación o amenaza de los intereses colectivos.

**Artículo 14.-** Dispuestas las medidas cautelares, el Juez da traslado en forma inmediata y dentro de las veinticuatro (24) horas al denunciado, para que éste produzca su descargo como contestación de demanda y ofrezca prueba en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación.

**Artículo 15.-** Promovida la acción, se da publicidad a la misma por medio de edictos, radio, televisión o cualquier otro medio que el Juez estime conveniente. La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de los elementos de la misma en cuanto a personas, tiempo y lugar.

**Artículo 16.-** El Juez cita a las partes a una instancia obligatoria de conciliación de los intereses en conflicto, dentro de los tres (3) días de ofrecida la prueba. En la sentencia definitiva, el Juez puede aplicar una multa al litigante que, en el rechazo de la solución conciliatoria, hubiere obrado con ligereza manifiesta. Es sancionado también el litigante que no concurre a la audiencia.

**Artículo 17.-** El Juez puede ordenar de oficio, la producción de medidas de prueba no propuestas por las partes o complementarias de ellas, decretar las que estime necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias pertinentes en torno a las diligencias a practicarse.

**Artículo 18.-** La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes intervinientes en el proceso. El Juez puede ordenar la publicación de la sentencia por los medios establecidos en el artículo 15 de la presente.

**Artículo 19.-** Sin perjuicio de la subsistencia de las restantes pretensiones que respondan a las partes, el proceso de amparo colectivo sólo puede reabrirse cuando dentro de un plazo improrrogable de dos (2) años contados desde la notificación de la sentencia denegatoria, el legitimado activo ofrece la producción de pruebas conducentes, de las que no ha dispuesto por causas que no le sean imputables.

**Artículo 20.-** Son recurribles las sentencias definitivas que resuelvan los amparos promovidos en el marco de la presente, como también las que decidan sobre las medidas cautelares peticionadas.

**Artículo 21.-** En las sentencias condenatorias definitivas, cualquiera sea el objeto de la acción, los Jueces podrán fijar multas a cargo de los sujetos responsables, teniendo en cuenta especialmente su situación patrimonial, la gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés colectivo comprometido. Asimismo, pueden imponerse multas contra quienes incumplan las medidas cautelares o las obligaciones resultantes de las sentencias definitivas.

**Artículo 22.-** En caso de litigar temerariamente, las entidades actoras y/o litisconsorciales y sus directivos responsables son solidariamente condenados al décuplo de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad por daños.

**Artículo 23.-** Las resoluciones que se dicten conforme a lo previsto en el artículo 4º, inciso e) de la presente, son anotadas en un Registro de Cláusulas Uniformes Abusivas, que implementa y lleva la Oficina de Defensa al Consumidor de la Provincia de Río Negro. Dicha inscripción debe contener:

- a) Reproducción literal del texto de la cláusula inhibida o invalidada.
- b) La extensión de la invalidez o de la prohibición del empleo, respecto de toda cláusula de igual contenido, en contrato predispuesto de análogo tipo, naturaleza y modalidades, cualquiera sea el adherente.

**Artículo 24.-** El Juez que haya dictado sentencia, fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa denuncia de parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida en todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa juzgada.

**Artículo 25.-** El importe de las multas establecidas en los artículos 16 y 21 de la presente, es depositado en una cuenta especial con destino a la "Cruz Verde Rionegrina", debiendo presentarse boleta de depósito en el expediente judicial dentro de los cinco (5) días de oblada la multa.